

Coyuntura

¿Ser o no ser? Esa es la cuestión

Marco Romero Cevallos

Comentario
Internacional
Número 5
1 semestre 2004

30

Coyuntura
Marco Romero

La integración andina busca alguna forma de mantenerse con vida frente al embate de las diversas fuerzas y procesos nacionales, regionales, hemisféricos y globales que generan múltiples y crecientes tensiones para un esquema regional que ya mostraba signos de fragilidad y una cada vez mayor crisis de identidad y de objetivos, en medio de un contexto económico y político internacional que no es precisamente el más favorable.

No se trata, desde luego, de la mera existencia formal de alguna instancia de integración andina, de bajo perfil y con escasa prioridad real, vaciada de contenidos sustantivos, sin capacidad de respuesta e iniciativa política frente a los diversos problemas que enfrentan los países miembros, sino de un proceso integrador sólido, coherente y sustantivo, que sea el eje articulador del posicionamiento internacional de la región y de su inserción económica en la globalización, que responda a las aspiraciones de sus pueblos.

Es preciso analizar los factores y fenómenos que caracterizan a la coyuntura actual en la región, para intentar esbozar las tendencias que marcarán el escenario en el futuro próximo en los países andinos.

Economía mundial no supera el ciclo recesivo

Muchos analistas de la economía mundial consideraban a fines del año pasado y comienzos del presente, que una vez superadas las “incertidumbres geopolíticas”, asociadas a las diferentes hipótesis respecto de las acciones que se preveía podría tomar Esta-

dos Unidos contra Sadam Hussein en Iraq, la reactivación tomaría fuerza y permitiría superar la fase recesiva y de crecimiento lento iniciada desde el año 2001.

Las repercusiones de tales acciones sobre el ciclo económico y aún sobre las perspectivas futuras rebasaban la destrucción de un porcentaje variable de la infraestructura petrolera iraquí, puesto que tendrían impactos diferenciados sobre los mercados de valores, los flujos de inversión y de comercio. Finalmente los efectos directos del conflicto fueron menos importantes que los previstos y el problema militar se resolvió también en un tiempo inferior al estimado inicialmente; sin embargo, la situación político militar en la región ha entrado en una fase diferente, no exenta de amenazas y con efectos económicos, particularmente importantes sobre la oferta de crudo en el mercado mundial, así como sobre las posibilidades de superación del ciclo económico.

En todo caso, los riesgos geopolíticos se redujeron sustancialmente en el segundo trimestre del año 2003, pese a lo cual las principales economías desarrolladas no mostraron claros síntomas de una recuperación sostenida. En el mejor de los casos, al iniciarse el segundo semestre existían indicadores ambiguos, algunos de los cuales generaban optimismo pero no permitieron discernir la inflexión de la tendencia. Otro factor negativo cuya influencia ha sido menor en la economía global en el 2003 fue el estallido de la epidemia del SARS desatada en China y en algunos países asiáticos.

A lo largo del año 2003, las diferentes previsiones globales, regionales o nacionales han sido revisadas a la baja. En las cifras de la OCDE y de las Naciones Unidas a mediados de año¹ se estimaba una recuperación global de 2,25 por ciento para el 2003 y una aceleración que llegaría a superar el 3 por ciento en el 2004. Todos coinciden en señalar que la única economía nacional capaz de liderar ese crecimiento y dinamizar a la economía global es la de Estados Unidos, cuyo PIB podría crecer según las estimaciones de la OCDE, 2,5 por ciento en el 2003 y 4 por ciento en el 2004.

Efectivamente, los países de la Unión Europea no están en condiciones de remplazar a la economía norteamericana en el rol de “locomotora” de la economía mundial, que cumpliera en la mayor parte de la década pasada. Marcados por la recesión oficialmente establecida en Italia, registrada técnicamente en Alemania y a la cual se acerca rápidamente Francia, en medio de un crecimiento muy

lento en el resto de países; acompañados de la generalización de problemas fiscales y el agravamiento de los índices de desempleo, las economías de dicha región están debilitadas y concentradas en superar esta fase cíclica.

La tasa de crecimiento de Europa Occidental sería en el 2003 ligeramente superior a la del 2002 (1 por ciento) con 1,25 por ciento y se aspira una recuperación al 2,25 por ciento en el 2004. La rigidez del pacto de estabilidad y la política restrictiva aplicada por el Banco Central Europeo mucho más cauto que la FED en la reducción de las tasas de interés, han limitado la posibilidad de aplicar políticas expansivas o anti cíclicas en la región. Según otra estimación², las economías del área euro habrían registrado un crecimiento del 0,8 por ciento en el 2002 y se prevén tasas de 1,1 por ciento en el 2003 y de 2,1 por ciento en el 2004.

El Japón por su parte sigue sumido en una profunda crisis que llegó a sus niveles más dramáticos en 1998 (salvo un leve respiro en el 2000); presenta en el período 2002-2004, una tasa promedio de crecimiento del PIB estimada en 0,3 por ciento anual. Las tasas de interés reales luego de sucesivas reducciones por parte del Banco del Japón se mantienen prácticamente en cero desde hace al menos dos años; se han aplicado igualmente varios paquetes fiscales de estímulo, sin resultados satisfactorios y duraderos. Mas aún, el fantasma de la deflación ha aparecido como una amenaza en el horizonte (no solo en esta sino también en otras economías desarrolladas). En tales condiciones, incluso su papel en la región asiática ha perdido cierta relevancia.

La economía norteamericana se ha visto afectada por la profunda deflación de los activos, asociada a la quiebra de la burbuja financiera en el 2000; ese proceso estuvo relacionado también con el impacto de los escándalos por la información contable y financiera fraudulenta entregada por grandes empresas que cotizan en las bolsas de valores. En consecuencia, la inversión ha perdido dinamismo, que no ha sido compensado por la demanda del consumidor.

La política de tasas de interés aplicada por la FED ha implicado 13 reducciones, casi sucesivas, de su tasa de redescuento, llevándola al 1 por ciento, el nivel más bajo desde 1958, buscando reactivar la inversión privada. En igual sentido, al menos retóricamente, se han adoptado políticas fiscales expansivas (reducciones impositivas y aumento del gasto militar), que han transformado el

superávit histórico alcanzado por Clinton a fines de su período, en un déficit fiscal cercano al 5 por ciento del PIB bajo la actual administración.

No obstante, esa evolución no ha dado mayor estímulo a la economía. Incluso el FMI ha amonestado, si bien muy tímidamente, a Estados Unidos, por lo que considera como una situación fiscal insostenible, resultante de una política fiscal expansiva, basada en recortes de impuestos y en el aumento del gasto militar.³ Contrariando el discurso liberal con el que llegó a la presidencia, Bush está aplicando el mismo esquema que usaron antes Ronald Reagan y su propio padre; en consecuencia ha logrado transformar el superávit de 2,5 por ciento del PIB recibido en el 2000 en un déficit que sería en el mejor de los casos del 4 por ciento del PIB en el presente año.

De hecho, como señala Krugman: “en los últimos 20 meses, la economía norteamericana ha operado en una dimensión desconocida: creciendo demasiado rápido para caer en la definición clásica de la recesión, pero muy lento para satisfacer los criterios usuales de una recuperación económica” y peor aún, dejando al “mercado laboral probablemente en las peores condiciones de los últimos 20 años”, situación que no se refleja completamente en los índices de desempleo.⁴

Reaparecen por lo tanto y con gran fuerza los denominados “déficit gemelos” (fiscal y externo) característicos de los años ochenta. Muchos analistas consideran que los ajustes para enfrentar, al menos el desequilibrio externo, han comenzado y se manifiestan en la devaluación del dólar frente al euro y al yen, registrada desde comienzos del 2002, en el cual se devaluó entre un 10 y un 20 por ciento, según el índice que se utilice.⁵ Para el futuro inmediato se prevé que continúe la fase de devaluación del dólar, si bien con características diferentes de las del período reciente.

Como consecuencia lógica de las tendencias anotadas, el ritmo de crecimiento del comercio mundial se ha debilitado significativamente en el 2001 y 2002 (con -0,9 por ciento y 1,8 por ciento, respectivamente), muy lejos de la tasa promedio del período 1994-2000 en el cual superó el 7,5 por ciento anual. Para el 2003 se pronostica un mayor dinamismo, con una recuperación hasta el 4 por ciento, que se reforzaría en el 2004, llegando al 7 por ciento.

Las estimaciones del crecimiento en las economías en desarrollo para el 2003 son mejores que las de las economías desarrolladas, con una tasa estimada de 3,5 por ciento y una previsión de 5 por ciento para el 2004. Siguiendo la tendencia de las últimas décadas, el dinamismo de las economías asiáticas es mayor, con 5,25 por ciento y 6 por ciento respectivamente en cada caso, si bien no recuperan los niveles anteriores a la crisis asiática, cuando sus tasas anuales de crecimiento bordeaban el 8 por ciento.

Las economías latinoamericanas si bien están alejadas de las regiones más directamente afectadas por los factores geopolíticos ya mencionados, han sufrido sus efectos indirectos, transmitidos por la reducción de la actividad económica y sus secuelas: la disminución de los flujos comerciales de bienes y servicios (por ejemplo, las líneas aéreas y el turismo redujeron drásticamente su actividad desde fines del 2001), junto a la disminución y mayor selectividad de las corrientes de inversión extranjera directa y de los flujos financieros internacionales.

Un trabajo reciente de la CEPAL establece, por ejemplo, que en el 2002, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe se redujo por tercer año consecutivo, cayendo en 33 por ciento frente al 2001. La reducción de los recursos por IED (representarían menos del 2 por ciento del PIB), determina que no puedan compensar la transferencia neta negativa de recursos financieros (equivalentes a un 4 por ciento del PIB); esta tendencia regional se explicaría, según la CEPAL, entre otros factores, por la inestabilidad prevaleciente y por el fin del ciclo de privatizaciones⁶. En consecuencia, incluyendo el 2003, por quinto año consecutivo se registra una salida neta de recursos desde la región, reeditándose el problema de las transferencias, que marcó la “década perdida” de los años ochenta.

No resulta extraño, entonces, que la CEPAL haya establecido que el período 1998-2003 es ya “un sexenio perdido”, considerando el deterioro registrado en el PIB per cápita de la región, en medio de un crecimiento muy lento en la mayoría de las economías.⁷

Tales tendencias globales se articulan con problemas internos diferenciados en los países latinoamericanos, generando un panorama regional desigual; por ejemplo, México y los países de América Central y el Caribe, son los más afectados por la pérdida de di-

namismo de la economía norteamericana, debido a su mayor dependencia de dicho mercado para sus exportaciones de bienes y servicios.

No podemos detenernos aquí en un análisis pormenorizado de tales procesos, de manera que a continuación analizaremos los elementos más importantes de los países de la Comunidad Andina que configuran la presente coyuntura regional.

Fragilidad económica e inestabilidad política en la Región Andina

Los países que conforman la Comunidad Andina están inmersos en el contexto antes esbozado, pero con características específicas que surgen de su forma de inserción en la economía global y de las particularidades de sus procesos e instituciones políticas y económicas.

Como ya hemos analizado en ocasiones anteriores, la región andina se ha convertido desde fines de la década pasada, en la zona más inestable y conflictiva de América Latina, por la confluencia de regímenes políticos muy débiles y fragmentados, con muy serias crisis económicas (las más dramáticas se registraron en Ecuador y Venezuela), y una evolución económica francamente insatisfactoria en el resto de países.

Las debilidades estructurales de los sistemas políticos en los países andinos, con democracias limitadas y asediadas, con un raquítico y clientelar sistema de partidos, así como con un profundo deterioro de su institucionalidad, se han acentuado en el último quinquenio, cuando se vuelve crónica la inestabilidad política y los problemas de gobernabilidad en el Ecuador; se polarizan las posiciones y se agudiza el conflicto en Venezuela, bajo un gobierno que adopta posiciones de creciente confrontación con la administración norteamericana; el viejo problema de la violencia en Colombia se agudiza y escala a nuevos niveles, con la aplicación del Plan Colombia y un mayor involucramiento de Estados Unidos al vincular el combate al narcotráfico con su estrategia global para enfrentar al terrorismo. En Perú y Bolivia por su parte, aumenta el serio deterioro de su gobernabilidad por el desprestigio y pérdida de legitimidad de los gobiernos de turno.

Los dramáticos desarrollos de septiembre y octubre en

**Comentario
Internacional**

Número 5
I semestre 2004

35

Coyuntura
Marco Romero

Bolivia, donde un gobierno completamente debilitado no encontró otra respuesta que masacrar a su pueblo⁸ para intentar mantenerse en el poder, contando exclusivamente con el apoyo de las fuerzas armadas y del gobierno

La región andina se ha convertido desde fines de la década pasada, en la zona más inestable y conflictiva de América Latina, por la confluencia de regímenes políticos muy débiles y fragmentados, con muy serias crisis económicas.

norteamericano, ilustran la gravedad de la crisis económica y social en ese país y en la región. Finalmente el presidente fue sustituido por el vicepresidente, pese a lo cual prevalece en ese país un frágil equilibrio político y no se registran mejoras sustanciales en su situación económica.

Por lo tanto, la estabilidad política y la confianza en los gobiernos establecidos en los países andinos no es un activo del que puedan preciarce; ello afecta a su percepción de riesgo país y por ende a su acceso a recursos financieros externos y sobre todo a los costos para lograr dicho acceso; en consecuencia, los ajustes económicos para enfrentar sus desequilibrios económicos se vuelven mucho más costosos en términos económicos y sociales.

En un contexto de retracción del financiamiento internacional a nivel global y hacia la región, quedan prácticamente solo las fuentes multilaterales como posibilidades de financiamiento para estos países. Así, tenemos que, excluyendo a Venezuela cuyos ingresos petroleros le permiten manejar mayores márgenes de maniobra en este campo, el resto de países andinos estaban aplicando en el 2003 programas de estabilización (Stand by) con el FMI⁹ bajo los cuales se ha realizado una primera revisión en tres casos, en tanto que con el Perú se ha avanzado hasta la segunda revisión. En tres de estos países las autoridades económicas han tenido dificultades para cumplir con los compromisos adquiridos bajo tales programas. Como siempre, el mantenimiento de programas con el FMI y su cabal ejecución son un requisito fundamental para acceder a los recursos de otras instituciones financieras como el Banco Mundial y el BID, entidades que también han comprometido sus créditos a esos países.

En cuanto al dinamismo económico, las tasas de crecimiento de los países de la región andina son muy diferenciadas, sin

embargo, puede identificarse cierta similitud en determinadas fases de crecimiento; así, en términos generales, los países andinos registraron una evolución favorable, al menos en cuanto al crecimiento económico, en el período 1991–1997, que coincidía con una tendencia muy dinámica de la economía norteamericana, el retorno de los capitales financieros a la región luego de la década perdida y un rápido crecimiento del comercio mundial; la excepción fue Venezuela, que sufrió una seria crisis bancaria y la consecuente recesión en 1994.

Desde 1998, el impacto de la crisis asiática y de sus secuelas en otras economías latinoamericanas como en el Brasil y más tarde en Argentina, unido al deterioro de los términos del intercambio y a una drástica y generalizada reducción de los flujos de capitales, producirán una significativa disminución del ritmo de crecimiento en las economías andinas, con tasas muy próximas a las del crecimiento vegetativo de la población, por lo que se genera un deterioro o en el mejor de los casos un estancamiento del nivel per cápita; precisamente la CEPAL ha caracterizado al período 1998–2002 como “la media década perdida”, la misma que se prolonga en el 2003, con débiles tasas de crecimiento.

Cabe hacer sin embargo algunas precisiones: la reducción del PIB en Bolivia comienza en 1999, cuando se registra igualmente una profunda recesión en Ecuador (–7,9 por ciento de caída del PIB) y en Venezuela (–5,8 por ciento); la difícil situación de Venezuela se agrava en el 2002 y se prolonga hasta el presente año por nuevas reducciones del PIB, estimadas en –8,8 por ciento y –10 por ciento, respectivamente.¹⁰ El Ecuador por su parte registró una tasa de crecimiento del 6 por ciento en el 2001, vinculada con una explosión del consumo que se produjo luego de la dolarización, pero que pierde fuerza luego, registrando tasas estimadas en 3,4 por ciento y 2 por ciento, en los dos últimos años; las previsiones de la evolución del PIB de Bolivia para ese mismo período son de 2,8 por ciento y 2 por ciento, respectivamente.

Cabe destacar la positiva evolución de la economía peruana, que habría crecido 5,2 por ciento en el 2002 y se estima creció un 4 por ciento en el 2003, la mejor evolución entre los países de la región andina, que duplica la tasa promedio prevista para toda América Latina y el Caribe.¹¹

De cualquier forma, salvo parcialmente en el caso del Pe-

rú, las economías de los países andinos no logran superar la fase recesiva; todas presentan tensiones en el sector externo y en el sector fiscal, pero sobre todo han visto incrementarse seriamente sus niveles de vulnerabilidad frente a fenómenos externos. La inflación ha dejado de ser un problema para Bolivia (promedio de 2,6 por ciento anual en el período 2002-2003), Perú (1,8 por ciento) y Colombia (6,8 por ciento); continúa elevada en Venezuela (31,6 por ciento), triplicando el promedio regional y se mantiene como una seria restricción en el Ecuador (con 12,5 por ciento en el 2002 y 7,9 por ciento en el 2003), por tratarse de una inflación medida en dólares.

Los flujos de inversión extranjera directa hacia las economías andinas en el año 2002 (caída de -33 por ciento con respecto al 2001) han continuado reduciéndose, tendencia que registra toda América Latina y el Caribe desde el año 2000. Sin embargo, la reducción ha sido mucho mayor en los casos de México y el Caribe (-40 por ciento), al ser más directamente afectados por la recesión norteamericana y por ser regiones a las cuales se dirigen las empresas transnacionales que buscan mejorar la eficiencia de sus procesos productivos; la caída de la inversión extranjera directa en la región andina (-18 por ciento) en el último año es menos pronunciada que la del conjunto de América Latina, puesto que se orienta fundamentalmente a sectores primarios, cuya dinámica es influida por otros factores.¹²

Ninguna de las economías andinas ha logrado consolidar un ritmo de crecimiento elevado y sostenido durante un período de tiempo suficientemente prolongado, condición indispensable para mejorar el nivel de vida y de educación de su población, tener la posibilidad de cambiar su papel en el manejo, adaptación y generación de tecnología, elementos que les permitirían empezar a superar sustentablemente el subdesarrollo.

Por el contrario, en el mejor de los casos durante períodos cortos se registran tasas relativamente mediocres, frente a las de economías dinámicas como las de Asia, que coexisten con deficiencias estructurales en la distribución del ingreso, fuerte dependencia externa de tipo financiero, comercial y tecnológico. En consecuencia, persiste su condición de subdesarrollo y la fragilidad de su inserción internacional.

Parece muy oportuna entonces la tesis de Stiglitz de avan-

zar hacia una nueva agenda de reformas para América Latina, que propicie un mayor equilibrio entre el sector público y el mercado, abandonando el excesivo énfasis en la privatización de empresas públicas, característico del esquema que dominó en las últimas dos décadas, pero sobre todo que ponga al empleo, a la producción y a la reducción de la pobreza como ejes de la política económica, retomando en definitiva el debate sobre el desarrollo como transformación de la sociedad.¹³

El escenario andino presenta tal fragilidad que a comienzos del 2004 el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos hizo público un informe que alerta a las autoridades norteamericanas sobre el fracaso de las dos décadas anteriores de política estadounidense hacia la región, caracterizada por su “inestabilidad política, estancamiento económico, creciente inequidad y divisiones sociales de clase, color, étnicas, ideológicas y urbano-rurales”.¹⁴ En consecuencia, señala la necesidad de replantear completamente la estrategia norteamericana centrada en el Plan Colombia y en la Iniciativa Andina Antinarcóticos, cuyos aspectos básicos son la seguridad y el combate al narcotráfico, hacia una política mucho más amplia y abarcadora, con una real perspectiva regional (reconociendo el carácter regional de la crisis), que ponga énfasis en iniciativas de desarrollo amplias, dirigidas hacia la población más pobre de esos países, que implique inversiones financieras y políticas en las áreas rurales, que impulse una reforma agraria estratégica y propicie un compromiso de la comunidad internacional mucho más amplio con las diversas dimensiones de los problemas en la región.

El contexto regional brevemente descrito constituye el telón de fondo en el cual se desarrollan las negociaciones para la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), así como el funcionamiento de los proyectos de integración en el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), todos bajo el paraguas general de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Luego del fracaso de las negociaciones en la OMC y de los limitados avances en la última reunión del ALCA, cuatro de los cinco países andinos se han embarcado en la negociación de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, en forma bilateral o como grupo. A continuación revisaremos los principales ejes de esta integración atomizada.

Integración fragmentada y los desafíos del futuro

Los períodos recesivos se asocian, por lo general, con un desequilibrio externo y con dificultades fiscales. Las respuestas clásicas son alguna forma de ajuste que reduzca el nivel de gasto, en particular el que se realiza en divisas, ello incluye muchas veces la priorización de gastos y la introducción de cambios en la dirección de flujos comerciales, tratando de mantener aquellos que se consideran fundamentales y restringiendo los que se considera tienen menor importancia relativa.

Existen múltiples evidencias que muestran los logros alcanzados por el proceso de integración andina, no vamos a abundar sobre ellos, mencionaremos solo el avance en la participación relativa del comercio intrarregional andino para los países miembros, que pasó para el conjunto de la CAN de 4 por ciento en 1990 al 14 por ciento en el 2000; el contenido manufacturero sustancialmente mayor de los flujos intrarregionales que el que tienen las exportaciones al resto del mundo y finalmente, las mayores tasas de crecimiento que registran las exportaciones intrarregionales, frente a la tasa de crecimiento de las exportaciones que se dirigen al resto del mundo. Todos estos aspectos inciden favorablemente en la generación de empleo.¹⁵

Igualmente, deben inscribirse entre los activos de la integración andina, la construcción de diversas instituciones que sustentan y apoyan el proceso; entre ellas destaca nítidamente la Corporación Andina de Fomento (CAF), que se ha convertido en la más importante fuente de financiamiento para varios de los países andinos, al margen de condicionalidades excesivas que coartan los márgenes de acción de los gobiernos.

Estos procesos dinámicos se registraron sobre todo en el período 1992-1997 y sus beneficios se canalizaron diferencialmente entre los países miembros de la CAN (los principales exportadores hacia la región en dicho lapso fueron Colombia, Perú y Ecuador). Posteriormente la recesión y el debilitamiento económico que arranca luego de la crisis asiática, los efectos del fenómeno de El Niño y la caída del precio del petróleo, entre otros factores, produjeron una reducción de los flujos comerciales en general y al interior de la región. No obstante, a fines del 2002 las exportaciones a los de-

más socios andinos representaban el 28 por ciento para Bolivia, un 19,4 por ciento para Colombia y un 16,6 por ciento para el Ecuador; para los otros dos socios las exportaciones a la subregión tienen un peso sustancialmente menor, con 6,6 por ciento y 4,9 por ciento para Perú y Venezuela, respectivamente. A nivel del conjunto de la CAN, las exportaciones intrarregionales representan un 10,3 por ciento en el 2002.¹⁶

En el primer semestre del 2003 se registró una significativa reducción de las exportaciones intrarregionales en la CAN (salvo el caso del Ecuador en donde crecieron 22,6 por ciento en el período enero-mayo, frente a igual lapso del 2002). Si se toma el período enero-agosto el incremento fue de 28,3 por ciento, que estuvo determinado básicamente por la reducción superior al 50 por ciento que registraron las importaciones de Venezuela debido a la profunda recesión que enfrenta en los dos últimos años.

Es preciso destacar, sin embargo, que la participación del comercio intra andino en el total se ha estancado en torno al 15 por ciento desde mediados de los años noventa y está muy lejos de los niveles de interdependencia comercial que se presentan en otros esquemas de cooperación e integración, como los del Asia Pacífico, la Unión Europea e incluso del MERCOSUR, pese a que tiene un período mucho menor de vigencia. Gran parte de los flujos comerciales intraregionales se explican por ejes dinámicos binacionales: Venezuela-Colombia, Colombia-Ecuador y Perú-Bolivia; el eje binacional Ecuado-Perú se ha ampliado en los últimos dos años.

Pese a las ambiciosas metas planteadas dentro del proceso de integración andina, reafirmadas en su relanzamiento a fines de la década de los ochenta y más tarde en su reestructuración a mediados de los noventa, el esquema integrador adolece de diversos problemas estructurales que no han logrado superarse y se han convertido en trabas para su avance. Entre otros podríamos mencionar la acumulación de incumplimientos en diversos compromisos asumidos y el manejo ambiguo de la política comercial y de integración de varios miembros, el uso de mecanismos no arancelarios (administrativos, sanitarios y otros) para bloquear los flujos de comercio en la región a la menor presión de grupos de interés locales que se consideran afectados y especialmente cuando se registran dificultades en su sector externo. Este comportamiento lo han tenido, a su turno, todos los países andinos.

Estos comportamientos frente al proceso de integración tienen bases objetivas en el carácter competitivo antes que complementario de buena parte de la producción (básicamente agrícola y de manufactura liviana) de los socios andinos y en las restricciones de la integración física regional y la falta de una visión estratégica de la región andina que pueda propiciar una inserción global cualitativamente superior, sobre la base de emprendimientos conjuntos y de una integración profunda.

En definitiva, no ha existido ni la voluntad ni la decisión política necesarias para darle al proceso integrador un papel prioritario para nuestro desarrollo y para nuestra inserción en el mundo. Los líderes políticos y los tomadores de decisiones económicas y de política exterior de nuestros países, salvo honrosas y escasas excepciones, carecieron de una perspectiva geopolítica y estratégica, de largo alcance, como la que tuvieron los “padres fundadores” de la Unión Europea, que parta de un análisis completo de la situación y de las perspectivas económicas y políticas reales de los países andinos en el contexto mundial, aislados y como grupo cohesionado de naciones. Desde luego que eso implicaba renunciar a ciertas parcelas de soberanía, hoy cada vez más relativas, en aras de un proyecto común cuya concreción debía ser el resultado de la iniciativa y de la participación de los diferentes actores sociales y económicos de nuestros países.

Sin embargo, algunos aspectos de nuestros orígenes; las herencias de las fases colonial y neocolonial de nuestra historia, entre las cuales estaban viejos conflictos fronterizos y antagonismos (que sin embargo nunca llegaron al nivel de las guerras que desangraron a Europa a lo largo de varios siglos); las limitaciones del subdesarrollo, tanto económico como social e intelectual y sobre todo la miopía de nuestras élites y el peso de una política norteamericana expresamente orientada a socavar cualquier esfuerzo de asociación y defensa conjunta de nuestros intereses, bloquearon esa dinámica y propiciaron el aislamiento real y la búsqueda de opciones en forma individual por parte de cada país.

La fragilidad y vulnerabilidad económica de estos países, unida a una inestabilidad política casi permanente han sido factores que han facilitado las tendencias centrífugas anotadas. Estas tendencias se aprecian claramente, en la presente coyuntura, en las posiciones mantenidas en las negociaciones comerciales internacionales.

les en curso, que han mostrado grandes vacilaciones y una gran dosis de incoherencia.

Efectivamente, todos los países andinos formaron parte del denominado G22, liderado por Brasil, India y China, que defendió en la conferencia ministerial de la OMC realizada en septiembre pasado en Cancún, los intereses de los países en desarrollo, exigiendo un compromiso real y claro por parte de las potencias industrializadas, Estados Unidos, Europa y Japón, acerca de eliminar los subsidios a sus productos agrícolas, la eliminación de los apoyos a sus exportaciones agrícolas y del uso de las medidas anti-dumping como un instrumento para proteger a los productores norteamericanos, antes de negociar los denominados nuevos temas (servicios, propiedad intelectual, inversiones y compras gubernamentales, entre los más importantes), en los cuales tienen grandes intereses los países industrializados, evitando asumir nuevos compromisos en forma totalmente asimétrica, como ya ocurrió en la Ronda Uruguay del GATT.

Esto llevó al fracaso de la cumbre de Cancún, levantó serias dudas respecto de las posibilidades de éxito de la Ronda de Doha y más aún, incrementó los cuestionamientos respecto de la eficacia y de las propias funciones de la OMC. La incertidumbre respecto de las perspectivas de la economía mundial debido a un previsible menor dinamismo del comercio también aumentaron.

El fiasco de la OMC agravó igualmente las dudas respecto de las posibilidades en el proceso de negociación del ALCA, que ya venía registrando un ritmo cada vez más lento de avance al aproximarse la fase de decisiones cruciales. En el propio Estados Unidos venía hablándose de un "ALCA light", con un menor alcance que el propuesto inicialmente, como la única forma de cumplir en los plazos previstos, a la par que sus autoridades comerciales venían impulsando una serie de iniciativas de acuerdos bilaterales o con grupos de países (por ejemplo: con cuatro países centroamericanos, el acuerdo firmado ya con Chile y los que podrían venir con Perú y República Dominicana, entre otros).

Los negociadores oficiales de Estados Unidos de hecho ya redujeron el alcance del ALCA al dejar fuera del acuerdo de libre comercio los temas de los subsidios y ayudas a la agricultura y la aplicación de las normas antidumping, precisamente los temas de mayor interés para los países latinoamericanos, ya que se relacionan

con el acceso al mercado norteamericano, el principal objetivo que persiguen estos países.

Luego de Cancún las autoridades norteamericanas expresaron muy claramente su objetivo de abrir los mercados en Latinoamérica “de una forma o de otra”; en consecuencia endurecieron sus posiciones y adoptaron una diplomacia comercial muy agresiva en la cual abundaron las presiones del más diverso tipo para romper al G22 o al menos reducir sus miembros, impidiendo la constitución de un frente regional que reivindique los mismos objetivos que el G22 planteó en la OMC, reclamando mayor simetría en las negociaciones.

El objetivo declarado era aislar a Brasil y llevarlo a ceder ante las presiones norteamericanas, bajo la amenaza de estar dispuestos a firmar un ALCA sin su participación. Esta es igualmente una reacción norteamericana frente a la posición brasileña evidenciada en las últimas reuniones del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) de ALCA, en el sentido de reducir su disposición a establecer compromisos exigentes en áreas que son de particular interés para Estados Unidos como son las relacionadas con los “nuevos temas”, especialmente en servicios, compras gubernamentales, inversiones y propiedad intelectual.

El debate se ha deslizado entonces hacia la conveniencia de firmar un ALCA “abarcador o integral”, en la línea de la propuesta norteamericana inicial o reducir su alcance debido a los retrasos registrados, así como al cambio del entorno en la disposición de algunos de los participantes, dando paso a un ALCA light que pueda firmarse en los lapsos previstos. De hecho existen diversos analistas incluso en Estados Unidos que pronostican un retraso de 1 ó 2 años hasta llegar a la firma de un ALCA cualquiera.

Sin embargo, en el escenario posterior a Cancún, los negociadores comerciales y otros sectores de la administración Bush han emprendido una agresiva campaña de presiones que ha llevado al retiro del G22 al menos de Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú y Ecuador.

En igual sentido, se orienta la atención dada por las autoridades norteamericanas a los requerimientos de algunos países latinoamericanos para firmar acuerdos bilaterales de libre comercio, del tipo del alcanzado con Chile y recién ratificado por el congreso de ese país. De hecho, ciertos gobiernos andinos como el del Perú y más

recientemente el de Colombia venían coqueteando con el régimen norteamericano desde hace algunos meses atrás para negociar bilateralmente. El gobierno ecuatoriano evidencia su interés por esa opción solo después del desenlace de Cancún y oficialmente solicitó entrar en ese proceso el 23 de noviembre pasado. El gobierno de Carlos Mesa en Bolivia no había ocultado su disposición para firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos.

El argumento principal con el que se defiende esa opción ha sido el temor de que ALCA no se firme hasta comienzos del 2005 sino mucho más tarde, por lo cual las exportaciones de estos países andinos que hoy día se benefician de las preferencias arancelarias andinas vinculadas al combate al narcotráfico (ATPDEA), que son preferencias condicionadas y unilaterales otorgadas por Estados Unidos, perderían todo beneficio puesto que las mismas concluyen a comienzos del 2006. Igualmente destacan los voceros oficiales de los tres países el peso predominante del mercado norteamericano para sus exportaciones, muy superior a la significación actual de los mercados del resto de socios andinos y de los países del MERCOSUR.

En suma, es un reflejo básicamente defensivo el que orienta a cuatro de los países andinos beneficiarios de las ATPDEA, a buscar acuerdos que les garanticen el acceso al mercado norteamericano, al menos en las condiciones actuales. Los responsables comerciales de dichos países han señalado que no han modificado su posición de exigir el fin de los subsidios y de las ayudas agrícolas y del uso de las medidas antidumping como medidas proteccionistas en tales negociaciones, sin embargo, es prácticamente imposible esperar que eso pueda darse en el marco bilateral cuando no ha podido avanzar en el marco de la OMC, ni tampoco en las negociaciones del ALCA.

Lamentablemente la posición de estos cuatro países andinos en su afán de firmar juntos o separadamente un TLC con Estados Unidos, parece responder más a la dinámica de la “aplanadora” norteamericana que ha empujado el proceso negociador en AL-

Es un reflejo básicamente defensivo el que orienta a cuatro de los países andinos beneficiarios de las ATPDEA, a buscar acuerdos que les garanticen el acceso al mercado norteamericano, al menos en las condiciones actuales.

CA desde la óptica de sus intereses, prácticamente sin ninguna objeción mayor ni contrapropuestas desde las condiciones y los intereses específicos de las economías latinoamericanas. Las negociaciones se han venido desarrollando en los terrenos y con las orientaciones definidas desde Estados Unidos (temas incluidos y los que se dejan para otros foros, formas de negociación, ritmos, etc.); solo la actitud de Brasil en la última reunión del CNC en Trinidad y Tobago después de Cancún, evidenciando su poca disposición para mantener en las negociaciones de ALCA temas que considera cruciales y en los cuales no está dispuesto a ceder posiciones, como son los de inversiones, servicios, compras gubernamentales y propiedad intelectual.

La posición brasileña, que ha contado con el respaldo firme de Argentina y en menor medida del resto de miembros del MERCOSUR, ha generado fuertes cuestionamientos y presiones desde Washington, ya que es la primera vez que un país plantea claras divergencias con la dinámica arrolladora de Estados Unidos y con sus tesis que explícitamente se han caracterizado en Brasil como “el pensamiento único”, prácticamente incontestado en el proceso.¹⁷ Como respuesta ante tales presiones el gobierno brasileño y el MERCOSUR, a finales de octubre, han hecho propuestas restringidas en los servicios y en lo que respecta a las inversiones.

Es importante destacar que las posiciones de Brasil responden no solo a su estructura económica y productiva mucho más compleja y diversificada que las del resto de países latinoamericanos, sino a su carácter de “global trader” y sobre todo a una concepción geopolítica de su rol en la región y en el mundo que no se reduce a ser un apéndice de Estados Unidos ni a someterse pasivamente a sus lógicas y políticas.

Pero quizás lo más importante para los demás países de la región es su defensa de la posibilidad de definir una verdadera política de desarrollo, sin asumir pasivamente el lugar que ocupan actualmente en la economía global.

En cuanto a los países andinos es importante revisar objetivamente la experiencia lograda durante la vigencia de las preferencias ATPA desde fines de 1991 y su renovación como ATPDEA en octubre del 2002, puesto que permite apreciar su aprovechamiento por parte de los países beneficiarios y sobre todo su capacidad de

generar una oferta exportable amplia y diversificada, puesto que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú han tenido arancel cero o rebajados en 6 000 partidas arancelarias que subieron a 6 700 bajo las ATPDEA.

Los informes periódicos preparados por instituciones especializadas de la administración norteamericana,¹⁸ establecen muy claramente una elevada concentración del aprovechamiento efectivo de las preferencias por parte de los países beneficiarios, en un reducido número de partidas, las cuales representan la mayor parte de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso del Ecuador si bien el número de partidas bajo las cuales se han realizado exportaciones a Estados Unidos se ha incrementado significativamente, pasando de algo más de 300 en 1993 (año en el cual el país fue calificado como beneficiario de las ATPA) hasta 930 en el 2003 solo 20 posiciones arancelarias entre las cuales están petróleo y derivados, rosas y otras flores, atún y otros productos de la pesca, mangos, plywood y otros artículos de madera, otros productos alimenticios y banano, representan el 87 por ciento de las exportaciones acogidas a tales preferencias. Cabe mencionar que el total de exportaciones ecuatorianas beneficiadas por las preferencias de ATPA llegó a un promedio anual en el período 1994-2002 de alrededor del 10 por ciento del total exportado a Estados Unidos. En el caso de Colombia ese porcentaje es en promedio de 13,5 por ciento entre 1999 y el 2001. Igual sucede con Bolivia y Perú.

Cabe recordar que el arancel promedio en Estados Unidos es uno de los más bajos del mundo: 2,7 por ciento considerando los rubros que entran bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y ATPA y 5,5 por ciento si se considera el tratamiento normal bajo el principio de la Nación Más Favorecida (NMF), que es el régimen natural dentro del GATT-OMC. Esto no elimina el problema de los “picos arancelarios”, esto es de aranceles significativamente más elevados para los productos a medida que tienen mayor valor agregado, lo cual afecta en particular a los afanes de los países en desarrollo de incorporar valor a sus productos primarios y generar mayor empleo. Las barreras no arancelarias (licencias, cuotas y normas: técnicas, sanitarias y de origen) y en particular los subsidios y otros apoyos a sus productores agrícolas, así como el uso de las reglas antidumping son los principales obstáculos para acceder al mercado norteamericano.

En consecuencia, es claro que los beneficios de las preferencias andinas ATPDEA cubren a una pequeña fracción de las exportaciones, no han implicado un apoyo importante, salvo para sectores puntuales, como las flores y recientemente para ciertos segmentos de la industria textil, ni tampoco representan un ahorro significativo de aranceles no pagados. Por lo tanto, parece excesiva, por decir lo menos, la desesperación y premura con la cual los cuatro países que se benefician de tales preferencias se han embarcado en la negociación de acuerdos bilaterales con Estados Unidos (importante mercado para sus exportaciones), rompiendo la posibilidad de negociar bajo mejores condiciones dentro del ALCA, bajo la justificación de la finalización próxima de las ATPDEA.

Incluso las perspectivas de una negociación conjunta de los cuatro países andinos con Estados Unidos son muy reducidas, de acuerdo a las declaraciones públicas de los representantes de dichos países en las últimas semanas.

Por lo tanto si consideramos el escenario electoral norteamericano en el 2004, que minimiza los márgenes para arrancar concesiones de parte de los representantes norteamericanos y los objetivos explícitos que persigue el gobierno norteamericano en estas negociaciones,¹⁹ las condiciones prevalecientes son las menos adecuadas y las capacidades negociadoras son absolutamente asimétricas. En consecuencia, aun el objetivo expresado por los países andinos de consolidar las preferencia ATPDEA, dándoles un carácter permanente, parece difícil de lograr salvo entregando concesiones importantes en los temas de servicios, inversiones, propiedad intelectual y compras gubernamentales. Parece imposible conseguir resultados satisfactorios mayores que los muy escasos o nulos logros obtenidos por Chile en su acuerdo bilateral en los temas agrícola y de los subsidios o en el uso del sistema antidumping, mayores que los muy escasos o nulos logros obtenidos por Chile en su acuerdo bilateral; lo que se afirma al respecto por parte de los negociadores andinos es pura retórica, ingenuidad o ignorancia.

En tal sentido, resultan premonitorias las advertencias recientes de una analista de los procesos de negociación comercial en la región: “La multiplicidad de acuerdos bilaterales, la carrera desenfrenada entre algunos de los socios de la CAN por iniciar negociaciones con Estados Unidos, aunado a las diferencias sobre temas

sensibles como el ALCA y la seguridad regional, lejos de unir fragmenta cada vez más a la Comunidad Andina. Si en los años pasados se podía atribuir a la conducta de algún gobierno en particular las dificultades de la CAN para avanzar hacia mayores grados de integración, hoy no existe un responsable único ni la amenaza de un caballo de Troya. Cinco jinetes corren desbocados, esperemos que no sea hacia el Apocalipsis.”²⁰

Es clara la necesidad de procurar un acceso adecuado, permanente y que no esté sujeto a condicionalidades de diverso tipo (como son las ATPDEA), a un mercado tan importante como el norteamericano, que es el destino para más del 43 por ciento en promedio de las exportaciones de los países andinos en los últimos cinco años. Sin embargo, deberían elegirse los tiempos, estrategias y modalidades, de acuerdo a los intereses de los pueblos de los países andinos, poniendo la prioridad en la temática del desarrollo y la inserción comercial como un instrumento para ese objetivo y no como un fin en si mismo. Las tendencias predominantes no apuntan precisamente en esa dirección.

Perspectivas

Por todo lo expuesto, las perspectivas de la Comunidad Andina como proceso de integración están marcadas por enormes desafíos y por fuerzas centrípetas que plantean serias dudas sobre su continuidad relevante. Como se conoce, las instituciones internacionales logran generar una inercia muy fuerte, la cual permite su permanencia, aun con mero carácter simbólico o burocrático y aun cuando carezcan de contenido sustantivo real.

Desde la Cumbre Presidencial Andina de Quirama tendió a prevalecer una corriente que planteaba privilegiar la dimensión política de la integración dejando de lado el entrapamiento en el que han caído los temas comerciales y la definición y aplicación del arancel externo común. Paradójicamente hoy día son la Unión Europea y ciertos sectores de Estados Unidos los que plantean la necesidad de mantener y profundizar la integración andina con el fin de mejorar las condiciones de nuestra inserción en la globalización. Incluso frente a la perspectiva de los acuerdos de libre comercio entre los cuatro países andinos y Estados Unidos, sería el gobierno norteamericano, por razones del costo básicamente admi-

nistrativo de las negociaciones, el que propiciaría negociaciones conjuntas que podrían incorporar segmentos específicos con cada uno de ellos.

En enero del 2004 se ha producido la posesión del nuevo Secretario General de la Comunidad Andina, el ex canciller peruano Allan Wagner, funcionario que ha tenido larga vinculación con el proceso de integración andina desde sus orígenes y ha mostrado una clara vocación integracionista. El Secretario General en su discurso de posesión ha reconocido los logros y las frustraciones de los 34 años de la integración andina y ha destacado los desafíos que plantea la globalización para la región. En consecuencia, postula la necesidad de focalizar las acciones en un nuevo Diseño Estratégico, cuyos ejes centrales apuntarían hacia fortalecer la capacidad de los países andinos para enfrentar los desafíos de la globalización. En concreto se plantea cuatro ejes: la convergencia hacia el libre comercio, el desarrollo de la competitividad, los nuevos temas y las tareas políticas.²¹

En concreto, se plantea diferir por seis meses la aplicación del arancel externo común, bajo los argumentos de que los aranceles han perdido relevancia en la política comercial y que desaparecerán debido a la opción hecha por los países hacia el libre comercio. Por lo tanto, se considera necesario priorizar otros temas como son: políticas de competencia, propiedad intelectual, reglas de origen, barreras no arancelarias y reglas antidumping, entre otras, como los aspectos más importantes y las barreras reales al comercio. Igualmente se menciona la necesidad de combatir al contrabando y de impulsar el libre movimiento de capitales. Entre los nuevos temas la propuesta incluye la energía y el medio ambiente, en razón de su importancia para la región y de sus potencialidades.

Es claro que la orientación propuesta para el proceso de integración por parte de Secretaría General, como órgano ejecutivo de la Comunidad Andina, es un reflejo de supervivencia como respuesta frente a las presiones y amenazas de distintos países miembros de retirarse del mismo; la más reciente es la planteada por Perú, al reiterar en una reciente reunión subregional su conocida oposición al AEC, secundada entusiastamente por la delegación ecuatoriana. Tal propuesta reconoce las posiciones predominantes en cuatro de los gobiernos de la región, alineados cada vez más tras las po-

siones de Washington y deseos de firmar lo más pronto posible un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, lo que significa una amenaza muy seria para los flujos comerciales (en particular de productos manufacturados) desarrollados trabajosamente en la región en las décadas pasadas, además de otros efectos que no podemos analizar aquí. Cabe preguntarse sobre los recursos económicos y políticos que sustentarán las propuestas de la Secretaría General, en un escenario en el cual la prioridad que los países miembros otorguen a la integración será todavía menor que la asignada en los últimos años, en la medida en que las políticas económicas y comerciales asumen una dirección bajo la cual aun la tesis del “regionalismo abierto” pierde piso. La obligación de que los congresos nacionales aprueben cualquier acuerdo que se negocie abre la posibilidad de que sus ciudadanos se pronuncien y puedan incidir en el futuro de sus países y también de la integración andina.

NOTAS

1. Ver por ejemplo: United Nations, *The World Economy in 2003*, Capítulo I de “World Economic and Social Survey”, del 25 de 2003; y OECD *Economic Outlook No. 73*, junio de 2003.
2. *Economic and Market Analysis, Latin America*, April 3, 2003.
3. Nota de la BBC de Londres, *El FMI amonesta a Washington*, 11 de agosto de 2003.
4. Paul Krugman, “Twilight Zone Economics”, *The New York Times*, August 15, 2003.
5. Cabe recordar que el dólar se habría apreciado entre un 35 por ciento y un 50 por ciento, como lo muestra su promedio ponderado por el comercio (para el que existen diferentes índices), entre comienzos de 1995 y febrero del 2002; por cada 1 por ciento de apreciación se ha estimado un incremento de 10 mil millones en el déficit de cuenta corriente, por ello el déficit total supera hoy los 500 mil millones de dólares. Para financiar ese déficit y las salidas de capital, Estados Unidos necesita entradas por más de 4 000 millones de dólares cada día laborable, situación que se considera insostenible. Ver Bergsten Fred, *The Correction of the Dollar and Foreign Intervention in the Currency Markets*, June 25, 2003, Institute for International Economics.
6. CEPAL, “La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe” Informe 2002, Santiago de Chile, marzo 2003.
7. Presentación del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, “Estudio Económico 2002-2003 de América Latina y el Caribe”, 7 de agosto de 2003.

8. Hasta mediados de octubre el número de víctimas de la represión oficial en Bolivia llegaría a 70 muertos y alrededor de 400 heridos.
9. Cabe anotar que en el caso de Colombia, se trata de un acuerdo por más de 2 100 millones de dólares para 2 años, contratado como precaución y que no ha sido utilizado hasta el presente. El acuerdo con Perú tiene un monto de 359 millones; los firmados con Ecuador y Bolivia son por 206 millones y 121 millones de dólares, respectivamente.
10. La huelga de amplios sectores de la economía, incluyendo al estratégico sector petrolero, que se prolongó durante 60 días en el 2003, tuvo un impacto directo en su ritmo de crecimiento.
11. Cifras tomadas de CEPAL, "Proyecciones de América Latina y el Caribe, 2003" Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos No. 19, abril de 2003.
12. En el período 1999-2001, las inversiones extranjeras se han concentrado en petróleo y gas, en Ecuador (80,7 por ciento del total), en Bolivia (48,1 por ciento) y en Venezuela (33 por ciento); Ver CEPAL, "La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, Informe 2002" Santiago de Chile, marzo 2003.
13. Joseph E. Stiglitz, "El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América Latina", Revista de la CEPAL No. 80, pp. 7-40, Santiago de Chile, agosto 2003.
14. Report of an Independent Comisión Sponsored by Council of Foreign Relations Center for Preventive Actino, Andes 2020. "A new strategy for the challenges of Colombia and the region", December 2003.
15. Ver los documentos de la Secretaría General de la CAN, por ejemplo, "El comercio intraregional y la generación de empleo, diciembre del 2001" y "Evaluación del desempeño económico de los Países Andinos en el año 2001", julio 2002, disponibles en la página web de la Comunidad Andina.
16. Ver: Indicadores mensuales de la Comunidad Andina, julio 2001.
17. Sobre todo de un país como Brasil que representa un peso relativo en las exportaciones e importaciones hemisféricas superior al de todos los 5 países de la CAN juntos e igualmente muy superior al conjunto de los 24 países restantes, si se excluye a Estados Unidos, Canadá, México y Argentina.
18. El más reciente es: "The Impact of the Andean Trade Preference Act. Ninth Report 2002", de la United States International Trade Commission USTIC, September 2003.
19. Ver la carta de Robert Zoellick, Representante Comercial de Estados Unidos dirigida a Dennis Hastert, Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 18 de noviembre del 2003.
20. Susana Pezzano, La Insignia, Argentina, 28 de agosto de 2003.
21. Comunidad Andina: Integración para la Globalización, discurso de posesión del Secretario General, Lima, 15 de enero de 2004.